



La sociedad civil y la paz con el Ecuador

Jorge Ortiz

Director Ejecutivo del Instituto Peruano de Economía y Política (IPEP)

Síntesis: Ha transcurrido más de seis años desde que el conflicto entre Perú y Ecuador llegó a su fin. Durante ese tiempo, los actores de la sociedad civil fronteriza han avanzado significativamente en la identificación y construcción de intereses comunes. En la medida en que los intereses de estos pueblos estén más entreteljidos sus relaciones serán más estables y pacíficas.

Las relaciones peruano-ecuatorianas vivieron un cambio sustancial en octubre de 1998 cuando se puso punto final a los diferendos fronterizos que nos habían llevado a enfrentarnos militarmente en varias oportunidades. Los acuerdos de Brasilia fijaron un conjunto de mecanismos oficiales destinados a fortalecer las relaciones bilaterales en diversos planos -económico, cultural, político- y a mejorar las condiciones de vida de la población fronteriza -Plan Binacional de Desarrollo-. Pero al margen de los mecanismos oficiales, la población de ambos países asumió un papel crecientemente activo en consolidar la tan ansiada paz.

Esto fue particularmente notorio en el eje Piura-Loja, en el que los pobladores de ambos lados de la frontera redescubrieron viejos vínculos familiares, económicos y culturales, que se remontaban a varios siglos atrás. Algo similar ocurrió en la relación entre Guayaquil y Cuenca con otras localidades de la costa y sierra norte peruana. Distinto es el caso de Iquitos, donde la creciente indignación por el histórico abandono en que vive la Amazonía por parte del Estado Peruano se tradujo en una posición de rechazo a los acuerdos alcanzados.

Desde entonces han transcurrido más de seis años y, como era previsible y deseable, la fluidez y variedad de la relación entre los actores de la sociedad civil fronteriza ha logrado avances muy significativos en la identificación y construcción de intereses comunes. Son varios los actores institucionales que han jugado papeles notables en ese contexto, entre ellos las universidades del norte del Perú y del sur del Ecuador, e iniciativas como la Ruta Quetzal BBVA, pero la parte gruesa de esa labor de construcción de vínculos ha recaído en miles de peruanos y ecuatorianos que, de manera individual, han cruzado la frontera con el simple ánimo de conocer a quienes viven al otro lado. Ese proceso de integración, a nivel casi individual, constituye la base más sólida sobre la cual se construirá una integración duradera.

Por otro lado, los mecanismos oficiales creados en 1998 también han hecho su parte, como el Plan Binacional de Desarrollo de la Región Fronteriza, que llevó a cabo una intensa gestión por promover el desarrollo a ambos lados de la frontera. La tarea no era sencilla, pues se requería invertir unos tres mil millones de dólares en la zona durante un periodo de diez años. Dichos recursos debían provenir de la inversión privada, la inversión pública y la cooperación internacional, esta última canalizada a través del Fondo Binacional para la Paz y el Desarrollo. La obtención de estos recursos ha sido y continúa siendo una tarea compleja, que se ha hecho más difícil en la medida que ha transcurrido el tiempo. La cooperación internacional es la que quizá haya respondido con mayor prontitud, habiendo comprometido recursos por casi trescientos millones de dólares hasta el momento.

La inversión privada en la región fronteriza tiene su propio ritmo y, ciertamente por más que los mecanismos oficiales se esmeren en promoverla, irá fluyendo en la medida en que



nuestros países sean capaces de generar ambientes favorables. Lamentablemente, la inestabilidad política y económica que se ha vivido tanto en el Perú como en el Ecuador desde finales de la década pasada, ha generado numerosas dificultades para atraer recursos privados a la zona. Tampoco la inversión de fondos públicos en la región fronteriza ha estado a la altura de los compromisos asumidos en octubre de 1998.

A pesar de eventuales relanzamientos de este tipo de programas, con designación de comisionados presidenciales para el efecto, lo cierto es que la consolidación de la paz entre Perú y Ecuador es un proceso que depende cada vez más de la sociedad civil y menos de los gobiernos de ambos países. Obviamente, esto no significa que los mecanismos oficiales no tengan un rol en esto. Lo tienen, y es muy importante, pero la historia nos demuestra que las relaciones entre los pueblos son más estables y pacíficas en la medida en que sus intereses están más entrelazados. El que dos estados firmen un acuerdo de paz no garantiza que ésta será permanente. En realidad, la mejor garantía que podemos tener para una paz duradera es que los ciudadanos de dichos estados perciban que sus intereses comunes son más fuertes e importantes que las dificultades que eventualmente surjan entre ellos.

Muestra de ello ha sido la actitud ecuatoriana ante las revelaciones sobre un supuesto soborno a algunos congresistas ecuatorianos para que aprobaran los acuerdos de paz. La comprensible indignación generada en Ecuador, que trajo a Lima una comisión para interrogar al inefable Vladimiro Montesinos, ha llevado a sus principales autoridades a señalar que ese hecho, de comprobarse, no afectará la paz entre nuestros países.

Todo parece indicar que el proceso es irreversible, y que quienes combatieron un día defendiendo las posiciones de nuestros respectivos países, pueden hoy mirar con optimismo hacia un futuro más seguro para las siguientes generaciones de peruanos y ecuatorianos.